

Las becas a que se refiere el párrafo anterior serán financiadas por el Gobierno de España con la dieta diaria equivalente a la establecida para los funcionarios españoles en territorio nacional vigente en cada momento, así como el pasaje para su desplazamiento a España y retorno al punto de origen, así como viajes programados por el interior de España, facilitándoles igualmente los contactos, enseñanzas y materiales de trabajo e informativos que en cada caso se consideren necesarios.

ARTÍCULO IV

Las obligaciones financieras estipuladas en el artículo III serán satisfechas con cargo a los créditos que se autoricen anualmente para Cooperación Técnica en los presupuestos ordinarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

ARTÍCULO V

Al frente de la Cooperación Socio-laboral española actuará como responsable un Jefe de Área de la misma, que será nombrado al efecto, con las funciones que específicamente se le encomiendan y que, en determinados casos, a juicio de la Oficina de Relaciones Sociales Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, asumirá la ejecución de determinados proyectos que puedan tener relación con su especialidad.

El personal de Cooperación Técnica Internacional actuará en el país de destino, bajo la dirección de la Embajada de España, y sus actividades serán coordinadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

ARTÍCULO VI

El Gobierno de Honduras se obliga a:

- a) Otorgar las máximas facilidades para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Acuerdo.
- b) Facilitar los Centros e instalaciones precisas para la realización de los proyectos, de conformidad con las prioridades que se establezcan de mutuo acuerdo.
- c) Exonerar de toda clase de impuestos, tasas y gravámenes aduaneros u otros, tanto nacionales como departamentales, municipales o de cualquier otra índole, a los materiales, maquinaria y equipos que con destino a la misión de Cooperación Técnica española se adquieran en España.
- d) Otorgar a los expertos españoles destinados en su país los privilegios, franquicias e inmunidades de todo orden que el Gobierno de Honduras concede a los funcionarios de Organismos internacionales, extendiéndoles la oportuna documentación, previa acreditación por vía diplomática, con validez desde su incorporación hasta su cese en la misión.
- e) Asignar a cada uno de los expertos de las contrapartes nacionales el personal directivo, técnico-docente, de administración y servicios que se requieran para el buen funcionamiento del proyecto de cooperación, los cuales deberán trabajar en estrecho contacto con sus homólogos españoles.
- f) Poner a disposición de la misión española las oficinas y equipamiento de personal y material necesario para el normal funcionamiento, tanto de los Jefes de Área como de sus colaboradores.
- g) Poner a disposición de los expertos españoles los medios de locomoción necesarios para los desplazamientos en cumplimiento de sus funciones. En el supuesto de que deban viajar fuera de su sede habitual en el país, el Gobierno asumirá los gastos del traslado, alojamiento y manutención correspondientes.
- h) Facilitar vivienda a los expertos españoles o, en su defecto, una compensación económica mensual en moneda nacional equivalente a 100 dólares USA, siempre que el período de misión exceda de tres meses.

ARTÍCULO VII

Con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento del presente Acuerdo, las Partes convienen en establecer una Comisión de Seguimiento y Evaluación del mismo, integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, el Agregado laboral acreditado en Honduras C.A., el Jefe de Área de la Cooperación Técnica Española, un representante de la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, que podrá delegar en la Embajada de España, y otro del Ministerio de Trabajo de Honduras C.A., así como un representante de cada una de las Instituciones responsables de la ejecución del Acuerdo.

ARTÍCULO VIII

Serán funciones de la Comisión a que se refiere el artículo anterior las siguientes:

1. Informar al final de cada semestre natural a la Comisión Mixta Hispano-hondureña establecida en los Convenios de Cooperación Social Hispano-hondureño de 4 de noviembre de 1971 y Básico de Cooperación Científico-técnica de 8 de diciembre de 1981, que señalarán las líneas generales de actuación, y a la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional sobre los objetivos alcanzados y los que se proponen para el siguiente.

2. Proponer a la Oficina de Relaciones Sociales Internacionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España la programación anual de actividades, dentro de los máximos establecidos en el artículo III, así como el calendario para su ejecución.

3. Supervisar el desarrollo del presente Acuerdo Complementario.

4. Sugerir la adopción de medidas conducentes a conseguir el máximo aprovechamiento y eficacia de la mutua cooperación.

5. Evaluar las acciones realizadas informando de los resultados a los Organismos ejecutores del Acuerdo, así como a la Embajada de España.

6. Proponer las modificaciones de programación que los proyectos aconsejen, en relación con las previsiones a que se refiere el punto 2º de este artículo.

7. Actuará como Presidente de la Comisión el representante del Ministerio de Trabajo de ambos países alternativamente o persona en quien delegue, actuando como Secretario el Jefe de Área.

ARTÍCULO IX

El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir del 1 de enero de 1986 y entrará en vigor definitivamente el día en que ambas Partes se hayan notificado por vía diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, en cuyo caso finalizará su vigencia seis meses después de la fecha de denuncia, no afectando ésta a la ejecución de los proyectos o actividades en curso, salvo que se convenga expresamente lo contrario.

De común acuerdo, ambas partes firman «ad referéndum» el presente Acuerdo Complementario en Tegucigalpa, Distrito Central, a los treinta días del mes de diciembre de 1985, en dos ejemplares originales, haciendo fe igualmente ambos textos.

Por el Gobierno del Reino de Por el Gobierno de la República
España,
de Honduras,

Rafael Descallar Mazarredo,
Enviado de Negocios a.i.

José Tomás Arita Valle,
Subsecretario de Relaciones
Exteriores

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente a partir del 1 de enero de 1986, de conformidad con lo dispuesto en su artículo IX.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 21 de marzo de 1986.—El Secretario general Técnico,
José Manuel Paz y Agüeras.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

8638

ORDEN de 31 de marzo de 1986 por la que se regula el procedimiento de reembolso y pago de dietas y gastos al personal de la Administración Pública, convocado a las reuniones de Comités y grupos de trabajo de la Comunidad Europea.

Excelentísimos e ilustrísimos señores:

La adhesión de España a la Comunidad Europea hace necesaria la participación de personal de la Administración Pública española en las reuniones de Comités y grupos de trabajo, lo que ocasiona gastos de dietas y traslados que requieren una consideración específica.

Dicha consideración ha de hacerse esencialmente sobre la base de que las normas de la Comunidad prevén el reembolso de los gastos de viaje, incluida la estancia, en determinados supuestos, de una o varias personas y de la necesidad de establecer un procedimiento ágil de concesión de anticipos que facilite a los comisionados la realización de su cometido.

Por otro lado, resulta conveniente articular un sistema centralizado para la recepción de los reembolsos que con dicha finalidad efectúe la Comunidad, así como contemplar la posibilidad de que dichos fondos puedan ser destinados a compensar a los Departamentos u Organismos los anticipos que hubieran efectuado.

De acuerdo con todo ello, dispongo:

Primer.º—El reembolso de los gastos de viaje y dietas del personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1344/1984, de 2 de julio, por su participación en Comités y grupos de trabajos de la Comunidad Europea, se regirá por el citado Real Decreto y sus disposiciones complementarias, con las especialidades establecidas en los apartados siguientes.

Segundo.—En cualquier caso, la participación en los citados grupos y Comités requerirá, además de la oportuna acreditación por parte de la Secretaría de Estado de Relaciones con la CEE, la previa orden de comisión de servicio por parte de la autoridad competente, la cual deberá disponer con anterioridad a su emisión del oficio o escrito de convocatoria efectuada, en su caso, por la propia Comunidad.

En la orden de comisión se deberá especificar si los gastos de viaje y dietas del personal correspondiente serán reembolsados por la Comunidad Europea.

Tercero.—El personal comisionado que, conforme al artículo anterior, tenga derecho al reembolso de gasto por la Comunidad Europea, quedará obligado a cumplimentar los trámites necesarios para que la Comunidad pueda hacer efectivo el reembolso.

Cuarto.—El personal comisionado podrá solicitar el adelanto por la Pagaduría o Habilitación correspondiente del importe, aproximadamente, de las dietas o pluses y gastos de viaje que pudieran corresponderle, de acuerdo con los importes vigentes en España y con arreglo a las disposiciones de aplicación general.

Los citados anticipos se concederán, en todo caso, aun cuando los gastos hayan de ser reembolsados por la Comunidad Europea.

Quinto.—La justificación de las dietas y gastos de viaje se efectuará con sujeción a las disposiciones generales sobre la materia, si bien, los comisionados que tuvieran derecho al reembolso de los citados gastos por la Comunidad Europea podrán presentar copia de los documentos justificativos pertinentes o, en su defecto, certificación expedida por la Secretaría de Estado de Relaciones con la CEE, en el supuesto de que los originales hubieran debido ser entregados en el correspondiente órgano comunitario.

Sexto.—Las cantidades que la Comunidad Europea reembolse por las dietas y gastos de viaje correspondientes al personal aludido en el apartado 2.º, párrafo 2.º, se ingresarán en la cuenta que a tal efecto se habilita por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en el Banco de España, con la denominación «Tesoro Público gastos reembolsados por la CEE».

Séptimo.—Por las cantidades reembolsadas por la Comunidad Europea, y con cargo a la cuenta aludida en el apartado anterior, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera efectuará, trimestralmente, ingresos en el concepto 319.03 «Otras prestaciones» del Presupuesto de Ingresos del Estado.

Por el importe de los citados ingresos se podrá generar crédito en el artículo 23 «Indemnizaciones por razón del Servicio» del Servicio 02 de la Sección 31 «Gastos de diversos Ministerios», del Programa «Imprevistos y Funciones no clasificadas» al efecto de que, a su vez y con cargo al mismo, puedan realizarse las oportunas transferencias de crédito a los distintos Departamentos para atender las necesidades que surjan en los mismos.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a VV. EE. y a VV. II.
Madrid, 31 de marzo de 1986.

SOLCHAGA CATALAN

Excmos. Sres. Secretarios de Estado e Ilmos. Sres. Subsecretarios.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES

8639

ORDEN de 1 de abril de 1986 sobre régimen tarifario de los servicios públicos de viajeros en vehículos de menos de diez plazas.

Ilustrísimo señor:

Los servicios de transporte público interurbano discrecional de viajeros realizados en vehículos de menos de diez plazas, provistos de tarjeta VT, se hallan sujetos al régimen de autorización administrativa con sujeción al sistema tarifario y condiciones de

aplicación regulados en el artículo 69 del vigente Reglamento de Ordenación de los Transportes Mecánicos por Carretera.

La competencia para fijación de la tarifa de estos servicios corresponde a la Administración Estatal en base al ámbito nacional de la autorización habilitante para el ejercicio de la actividad.

Por otra parte, gran número de estos servicios se prestan en cortos recorridos en itinerarios que, aun cuando tienen el carácter de interurbanos, se realizan en cercanías de grandes poblaciones, donde las características de la explotación, en lo referente a recorridos medios, velocidades, número de servicios, etc., hace aconsejable la fijación de un régimen tarifario distintos para estos cortos recorridos, especialmente en los que se refiere al cobro de mínimos de percepción, que no estaría garantizado de aplicarse el sistema generalizado de tarifa por kilómetro.

Asimismo, el incremento de los costes de explotación experimentados desde la aprobación de la última Orden de 12 de julio de 1984, sobre Régimen Tarifario de estos servicios y la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido, aconseja proceder a una actualización de los mismos y el consiguiente reconocimiento de las tarifas de aplicación de los servicios, manteniéndose el carácter de tarifa máxima establecido en la Orden antes citada, lo que no es óbice para la posible libertad de contratación a precios inferiores.

Por todo ello, oídas las Asociaciones afectadas, y analizada la estructura y cuantía de los costes determinantes de las tarifas de estos servicios,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Artículo 1.º Los servicios públicos de transporte interurbano discrecional de viajeros por carretera, llevados a cabo por vehículos provistos de autorización de la serie VT, excepto en los supuestos a los que se refiere el artículo siguiente de esta Orden, se realizarán con sujeción a las siguientes tarifas máximas (impuestos incluidos):

Precio por kilómetro recorrido o fracción: 35 pesetas.

Precio por hora de espera: 960 pesetas.

Mínimo de percepción: 200 pesetas.

Durante el transcurso de la primera hora de espera el usuario tendrá derecho a disponer gratuitamente de un tiempo de espera de quince minutos, transcurrido el cual se computará por fracciones de quince minutos a razón de 240 pesetas cada fracción.

Los mínimos de percepción no serán acumulables a recorridos a los que se haya aplicado la tarifa ordinaria por kilómetro recorrido.

Art. 2.º No serán de aplicación las tarifas máximas expresadas en el artículo anterior a los servicios de transporte interurbano por carretera prestados por vehículos que deban ser considerados de la clase c) por aplicación del artículo 2.º del Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, aunque dichos servicios se presten al amparo de autorizaciones de la serie VT.

Art. 3.º Los servicios se contratarán en régimen de alquiler por coche completo y los recorridos se entenderán en circuito cerrado hasta el punto de partida por el recorrido más corto, si no se conviniera expresamente lo contrario.

Art. 4.º Los vehículos a los que afecta la presente Orden, irán provistos de un impreso, un modelo oficial, cuyo formato y condiciones se especifican en el anexo adjunto, el cual se colocará en lugar visible del interior del vehículo.

Art. 5.º En cualquier caso el usuario tendrá derecho al transporte gratuito de su equipaje, que una vez utilizado el número total de plazas no podrá exceder de 50 kilogramos para los vehículos de hasta cuatro plazas y de 60 kilogramos para los de capacidad superior, siempre que el volumen de los equipajes permita introducirlos en portamaletas o en la baca del vehículo sin contravenir las Normas y Reglamentos de tráfico y circulación.

Cuando no se utilice el número total de plazas, estas cifras podrán aumentarse a razón de 30 kilogramos por asiento vacío, siempre que la forma, dimensiones y naturaleza de la mercancía facilite el ser transportada en el interior del vehículo.

Los excesos de equipaje sobre las cifras antes citadas se abonarán a razón de 0,50 pesetas por kilogramo-kilómetro, quedando el transportista en libertad de admitirlos cuando este exceso sea superior al 50 por 100 de dichas cifras.

Art. 6.º Al contratar el servicio se fijarán los recorridos, plazos y peso del equipaje.

Art. 7.º Por la Dirección General de Transportes Terrestres se dictarán las instrucciones que, en su caso, resulten precisas para la ejecución y desarrollo de la presente Orden, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Art. 8.º Queda derogada la Orden de 12 de julio de 1984.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 1 de abril de 1986.

CABALLERO ALVAREZ

Ilmo. Sr. Director general de Transportes Terrestres.